

Recurso nº 349/2018

Acuerdo de 8 de noviembre de 2018 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre el mantenimiento de la suspensión automática en relación con el lote 1 del “Acuerdo Marco para el suministro de tiras reactivas para la detección de niveles de glucemia capilar con destino a los centros sanitarios del Servicio Madrileño de la Salud”, número de expediente: PA SUM 24/2017.

Con fecha 29 de octubre de 2018, se ha recibido en este Tribunal escrito de don Nuno Miguel Vicente de Araujo Lomba, en nombre y representación de Johnson & Johnson, S.A., formulando recurso especial en materia de contratación, contra la Resolución número 531/2018, de 5 de octubre, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud, por la que se adjudica el “Acuerdo marco para el suministro de tiras reactivas para la detección de niveles de glucemia capilar con destino a los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud”, número de expediente: PA SUM 24/2017, en relación con el lote 1. Esto significa que quedan fuera de la impugnación los restantes lotes y por tanto no deben verse afectados por la suspensión automática.

En el recurso se solicita el mantenimiento de la suspensión automática *ex lege* de la adjudicación con el objeto de impedir que el recurso pierda su finalidad legítima.

Según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la tramitación del expediente se encuentra suspendida. El artículo 21.1 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del



Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, establece que cuando el recurso se interponga contra el acto de adjudicación, el órgano de contratación suspenderá de inmediato la ejecución del mismo si el recurso se interpone ante él o, en otro caso, en cuanto reciba el requerimiento del Tribunal para remitir el expediente de contratación. Y el apartado 3 del mismo artículo establece que en los procedimientos de contratación por lotes, cuando el recurso se interponga respecto a la adjudicación de lotes concretos, la suspensión solo afectará a los lotes que sean objeto de impugnación.

El órgano de contratación no se pronuncia sobre la suspensión solicitada.

El artículo 56.3 de la LCSP señala que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso, el órgano encargado de la resolución del recurso especial, decidirá sobre si procede o no el mantenimiento de la suspensión automática prevista en el artículo 53 de la LCSP, entendiéndose ésta vigente en tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento.

Dicho artículo es la traslación al derecho nacional del contenido de los considerandos 4 y 5 y el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE, de recursos (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE) en virtud de los cuales, la suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto de evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.



Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato. Con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación se evita que con la posible formalización del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.

Ponderadas las circunstancias del caso y al no haberse acreditado que el mantenimiento de la suspensión suponga perjuicio para los intereses generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA



Mantener la suspensión de la tramitación del lote 1 del expediente de contratación del “Acuerdo Marco para el suministro de tiras reactivas para la detección de niveles de glucemia capilar con destino a los centros sanitarios del Servicio Madrileño de la Salud”, número de expediente: PA SUM 24/2017, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

